

Radicado: 05001-31-05-008-2020-00038-01  
Radicado Interno: P1622222  
Asunto: Confirma sentencia

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**



**SALA LABORAL**  
**Acta N°240**

Medellín, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos interpuestos en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora **GLORIA DAMARIS RUIZ CANO** contra **JORGE ANDRÉS LAFOURE OSORIO** y **PROTECCIÓN S.A.**

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere de forma escrita.

**ANTECEDENTES**

**Pretensiones**

La demandante solicita que se declare que es la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes generada con ocasión de la muerte de su hija **Susana Cárdenas Ruiz**; y, en consecuencia, se **condene** a **Protección S.A.** al pago de la misma a partir del 22 de abril de 2019, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación.

**Hechos**

Como fundamento de sus pretensiones manifestó que su hija **Susana Cárdenas Ruiz** falleció el 22 de abril de 2019, dejando causados los requisitos para que sus potenciales beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes.

Dicha prestación fue reclamada por la actora como madre y el señor **Jorge Andrés Lafoure Osorio** en condición de cónyuge, siendo reconocida a este último porque según determinación de la administradora tenía un mejor derecho, decisión comunicada el 16 de agosto de 2019.

Si bien la causante contrajo matrimonio con el señor **Lafoure Osorio** el 27 de abril de 2013 y dicho vínculo no se encontraba disuelto para la fecha de la muerte, desde el 7 de marzo de 2017 se encontraban separados de cuerpos y la causante se fue a vivir a casa de su madre.

Desde el **7 de marzo de 2017** y hasta la fecha de su muerte la causante contribuyó económicamente con el hogar que compartía con su madre y dos hermanos.

#### **Contestación Protección S.A.**

La AFP demandada a través de apoderada indicó que son ciertos aquellos hechos que tienen que ver con la filiación y el estado civil de la causante, así como el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor del cónyuge de su afiliada, puesto que fue la persona que demostró la existencia de un mejor derecho.

En lo referente a las condiciones de vida de la causante indicó que no le constan.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, pago, compensación y prescripción.

#### **Respuesta Jorge Andrés Lafoure Osorio**

El codemandado no obstante tener conocimiento de la demanda, omitió dar respuesta a la demanda dentro del término concedido al afecto (10/págs.1-2).

#### **Sentencia de primera instancia**

La Juez Octava Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **9 de mayo de 2022**, declaró que la señora **Gloria Damaris Ruiz Cano** es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes generada con ocasión de la muerte de la afiliada **Susana Cárdenas Ruiz** por lo que en consecuencia **condenó a Protección S.A.** al reconocimiento y pago de la prestación a partir del 22 de abril de 2019,

así mismo impuso el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 13 de agosto de 2019.

Como fundamento de esta decisión indicó que se demostró en el proceso que, si bien la señora **Susana Cárdenas Ruiz** se encontraba casada con el señor **Jorge Andrés Lafoure Osorio**, los cónyuges estaban separados de hecho desde hace más de 2 años con anterioridad al fallecimiento, sin que se cumpliera por parte del cónyuge supérstite la demostración de un tiempo de convivencia superior a los 5 años para tener derecho a la prestación.

En ese orden al no demostrarse el requisito de convivencia para que el cónyuge accediera al derecho, se habilitaba la posibilidad de que la madre accediera al mismo acreditando la existencia de dependencia económica, condición que se encontró satisfecha a través de la prueba testimonial traída al proceso, puesto que con la misma se demostró que existía una ayuda económica relevante de la causante a su madre.

Esta decisión no la compartieron los apoderados de la parte demandada, motivo por el cual la recurrieron en los siguientes términos:

#### **Recurso de apelación Protección S.A.**

La apoderada de **Protección S.A.** manifestó su inconformidad parcial con la sentencia de primera instancia en cuanto a la imposición retroactiva del pago de la pensión, puesto que a su juicio se desconoció por parte de la juez de primera instancia que esa entidad de buena fe reconoció la pensión de sobrevivientes a la persona que estimó como beneficiaria de la prestación y a quien ha venido reconociendo el derecho hasta la fecha.

#### **Recurso Jorge Andrés Lafoure Osorio**

El apoderado del codemandado solicitó que se **revoque** la decisión de primera instancia, puesto que se desconoció el mejor derecho que le asiste en condición de cónyuge supérstite por cuanto conforme con la actual línea jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia contenida en la sentencia SL-1730 de 2020 tratándose de la muerte de un afiliado no es necesario un tiempo de convivencia mínimo siendo apenas necesaria la existencia del vínculo conyugal.

En ese orden, destaca que si bien la convivencia entre los cónyuges fue de poco más de tres años, lo relevante es que la causante y el demandado tenían

un vínculo matrimonial vigente a partir del cual se genera el derecho a la pensión de sobrevivientes que efectivamente le fue reconocida por **Protección S.A.**

### **Alegatos de conclusión**

Corrido el término de traslado establecido en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la apoderada de **Protección S.A.** indicó que esa entidad reconoció el derecho pensional a la persona que legalmente acreditó los requisitos para acceder a la misma, sin que por lo demás se cumpla en este caso con el requisito de dependencia económica de la señora Ruiz Cano frente a su hija, puesto que se demostró que la misma es autosuficiente económicamente.

Por su parte, el apoderado del señor **Jorge Andrés Lafoure Osorio** insistió en las razones expuestas en su recurso.

Finalmente, el apoderado de la demandante solicitó que se confirme la decisión de primera instancia, toda vez que no se demostró por parte del cónyuge la existencia de una convivencia por un mínimo de 5 años; y en ese orden la llamada a recibir la pensión de sobrevivientes es la madre, quien cumple con el requisito de dependencia económica.

## **CONSIDERACIONES**

### **Problema Jurídico**

El problema jurídico a resolver en esta instancia de conformidad con los recursos interpuestos, serán: (i) Establecer si el señor **Jorge Andrés Lafoure Osorio** demostró la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge de la afiliada **Susana Cárdenas Ruiz** y en caso de que la respuesta este primer aspecto sea negativa (ii) Determinar si **Protección S.A.** está obligada a reconocer las mesadas causadas desde el 22 de abril de 2019 en favor de la señora **Gloria Damaris Ruiz Cano** o si el pago realizado a quien consideró como beneficiario de la prestación tiene efectos liberatorios.

### **Pruebas relevantes**

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. La señora **Susana Cárdenas Ruiz** fue hijo de la señora **Gloria Damaris Ruiz Cano** (01/pág.21).
2. La señora **Susana Cárdenas Ruiz** contrajo matrimonio con el señor **Jorge Andrés Lafoure Osorio** el **27 de abril de 2013** (01/pág.25).
3. La señora **Cárdenas Ruiz** falleció el día **22 de abril de 2019** (01/pág.23).
4. Luego de su fallecimiento la pensión de sobrevivientes fue reclamada por su madre, siéndole negada por **Protección S.A.** en comunicado del 16 de agosto de 2019 en la que se le indicó que existía un beneficiario con mejor derecho (01/pág.36).
5. A través de comunicado del **16 de agosto de 2019**, **Protección S.A.** informó acerca del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al señor **Jorge Andrés Lafoure Osorio** en calidad de cónyuge supérstite por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 (09/pág.26).

Una vez efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a dar respuesta al problema jurídico propuesto:

**El requisito de convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado**

El artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 1993, norma vigente al momento del fallecimiento de la afiliada **Susana Cárdenas Ruiz**, sucedido el día **22 de abril de 2019**, expresa:

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes

[...]

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la *compañera o compañero permanente* o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la *compañera o compañero permanente* supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su

muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

El texto de esta norma ha tenido dos interpretaciones que pueden identificarse en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la primera que indica que no existe discusión entre la calidad de afiliado y pensionado para la aplicación de la norma, siendo exigible en ambos casos una convivencia de 5 años. Muestra de esta posición es la sentencia radicado 32356 del 7 de febrero de 2008, en la que se indicó:

...Visto lo anterior, en ningún error jurídico pudo haber incurrido el sentenciador de segundo grado al interpretar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, si se tiene en cuenta que las pensiones de sobrevivientes cuando se trata no solo de compañeras o compañeros permanentes, sino también de cónyuges de personas afiliadas o pensionadas fallecidas, están cimentadas sobre la efectiva convivencia con éstas...

Esa lectura de la norma se mantuvo en el tiempo, encontrándose como antecedentes más recientes las sentencias SL-20953 de 2017, SL-866 de 2018 y SL-868 de 2018. En esta última se expresó:

La jurisprudencia de la Sala ha precisado que tanto el cónyuge como el compañero (a) permanente están compelidos a demostrar el cumplimiento del requisito de convivencia en el lapso previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, independientemente de que se trate de la muerte de un afiliado o de un pensionado. La vida en común debe existir al momento de la muerte y en el término no menor a cinco años continuos con anterioridad a ésta, con la excepción admitida para los casos especiales del cónyuge separado de hecho pero con vínculo matrimonial vigente, en los términos delimitados en sentencias que no es del caso invocar, por no ser esa la situación del sub lite.

De este precedente sostenido hasta la sentencia SL-1401 del 4 de marzo de 2020, se destaca la necesidad de la demostración de dos elementos: uno subjetivo, consistente en la necesidad de demostrar la existencia de una comunidad de vida concebida en el apoyo mutuo, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual que tienen como fin consolidar un proyecto de vida y uno temporal, consistente en que la misma se extendiera por un término no inferior a 5 años.

La segunda interpretación aparece con la sentencia SL-1730 de 2020<sup>1</sup>, en la que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indicó que es necesario diferenciar entre la condición de pensionado y afiliado, siendo exigible el requisito de tiempo de convivencia únicamente para la sustitución pensional, puesto que, lo que quiso el legislador fue evitar que en los casos de pensionados se pudieran presentar fraudes por convivencias de último momento.

Se destaca además de esta providencia que no existe diferenciación entre cónyuge y compañera/o, puesto que lo que se privilegia es la protección del núcleo familiar sin importar si el mismo obedece a un vínculo legal o natural.

Este cambio de precedente motivó que la entidad condenada<sup>2</sup> presentara acción de tutela, por considerar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en causales de procedencia de tutela contra providencia judicial por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional.

Esta queja fue objeto de revisión por la Corte Constitucional que en sentencia SU-149 de 2021, declaró procedente la acción de tutela y advirtió que la diferenciación realizada por la Corte Suprema de Justicia es contraria al precedente contenido en la sentencia SU-428 de 2016 y a la línea que había trazado el mismo Tribunal Ordinario desde el 2005, según el cual no existe diferencia entre la condición de pensionado y afiliado a efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Como fundamento de su decisión el Alto Tribunal expresó que una interpretación que crea una diferenciación entre las familias de pensionados y afiliados crea un criterio diferenciador que no tiene soporte constitucional por lo que se desconoce el derecho de igualdad. En palabras de la Corte:

La Sala Plena considera que esta distinción no corresponde con los propósitos de la pensión de sobrevivientes en general ni con los del requisito de convivencia, en particular. Así mismo, esa diferenciación no obedece a una justificación objetiva que atienda al principio de igualdad. Sobre este aspecto, debe tenerse en cuenta que cualquier distinción entre sujetos que acceden a la misma posición jurídica, en este caso la sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes, según el caso, debe responder a una razón verificable y que suponga la

---

<sup>1</sup>Reproducida con posterioridad en las sentencias SL-4606 de 2020, SL-3785 de 2020, SL-3626 de 2020, SL-3843 de 2020 y SL-489 de 2021.

<sup>2</sup>ARL Positiva S.A.

atención de derechos, bienes o valores constitucionales significativos. De lo contrario, se estará ante una distinción arbitraria y, por ende, que vulnera el principio de igualdad.

Además del anterior argumento, sostuvo que la interpretación contenida en la sentencia 1730 de 2020 viola de forma directa el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, puesto que: “ *...ordenó el reconocimiento de la prestación sin acreditar la totalidad de los requisitos previstos por la legislación para el efecto y con sustracción del obligatorio análisis acerca de la existencia de un periodo mínimo de convivencia el cual, a su turno, es el soporte material de la dependencia económica entre el peticionario y el causante, ya sea este pensionado o afiliado.*”

En línea con lo expuesto y como quiera que existen para el caso dos sentencias de unificación la SU-428 de 2016 y SU-149 de 2021, cuya regla es que no existe diferencia entre la familia del pensionado y el afiliado en materia de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, esta Sala siguiendo los efectos vinculantes de integración e interpretación conforme con la Constitución en lo que refiere a casos concretos que tienen las sentencias de unificación, acata el precedente constitucional y en ese sentido advierte que para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes tanto de afiliado como de pensionado debe existir un tiempo de convivencia mínima de 5 años.

En ese orden, en lo que respecta al caso de autos, en donde se acepta que el matrimonio constituido por **Susana Cárdenas Ruiz** y **Jorge Andrés Lafoure Osorio** tuvo una convivencia inferior a los 5 años y que incluso en los últimos dos años de vida de la causante estos se encontraban separados, hechos en los que la Sala encuentra razones suficientes para desestimar la defensa del codemandado, puesto que como bien lo dejó anotado en los párrafos antecedente atendiendo a la interpretación que del requisito de convivencia para afiliado ha hecho la Corte Constitucional, resulta necesario un tiempo de convivencia igual a 5 años para acceder a la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge o compañero.

A partir de lo expresado encuentra la Sala que fue acertada de la decisión de la juez a-quo, motivo por el cual se **confirmará** la decisión apelada.

### **Del pago liberatorio respecto de mesadas pensionales**

Solicita la apoderada de **Protección S.A.** que el pago de mesadas pensionales realizado al señor **Jorge Andrés Lafoure Osorio** tenga efectos liberatorios en



la medida que fueron efectuadas a la persona a la que se estimo tenía un mejor derecho a partir de la interpretación de las normas y de buena fe.

Con respecto a esta solicitud, advierte la Sala que desde el mismo reconocimiento de la prestación, la administradora de pensiones conoció de la controversia entre los potenciales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, hecho que se desprende de la respuesta suministrada a la madre de la causante el día **16 de agosto de 2019** (01/pág.36) en la que se le indicó que existía un beneficiario con mejor derecho, decidiendo reconocer el derecho en favor del señor **Jorge Andrés Lafoure Osorio**, elección que no puede ser oponible a la señora **Gloria Damaris Ruiz Cano**.

En este sentido se debe recordar que si bien la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha aceptado que existen supuestos en que el pago realizado a un beneficiario libera del reconocimiento de esos valores a un nuevo beneficiario en aplicación del principio de sostenibilidad financiera del sistema (CSJ SL870-2018, CSJ SL5034-2021, SL540-2021, CSJ SL226-2021), tales condiciones no se cumplen en el caso de autos, por cuanto los pretendidos beneficiarios reclamaron el derecho de forma contemporánea y no existe una relación entre la demandante y el codemandado a partir de la cual puede pregonarse que esta se benefició de las mesadas recibidas como lo es el caso del padre representante legal de los hijos menores.

En ese orden al tratarse de derechos excluyentes y haber la administradora de pensiones con pleno conocimiento de la disputa a reconocerlo en favor de uno de ellos, no puede hacer oponible su decisión a la demandante, siendo en este aspecto acertada la decisión de primera instancia, por lo que en consecuencia se **confirmará**.

### **Costas**

Costas en esta instancia a cargo de **Protección S.A.** y el señor **Jorge Andrés Lafoure Osorio** de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 365 del Código General del Proceso-CGP-. Las agencias a cargo de cada uno de los recurrentes y en favor de la demandante se fijan en la suma de **\$500.000**.

### **Decisión**

Radicado: 05001-31-05-008-2020-00038-01  
Radicado Interno: P1622222  
Asunto: Confirma sentencia

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** la providencia de primera instancia dictada por la Juez Octava Laboral del Circuito de Medellín, el día **9 de mayo de 2022**, en el proceso ordinario adelantado por la señora **GLORIA DAMARIS RUIZ CANO** contra **JORGE ANDRÉS LAFOURE OSORIO** y **PROTECCIÓN S.A.**

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de **PROTECCIÓN S.A.** y el **SEÑOR JORGE ANDRÉS LAFOURE OSORIO**. Las agencias a cargo de cada uno de los recurrentes y en favor de la demandante se fijan en la suma de **\$500.000**.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.


### LOS MAGISTRADOS



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**

Radicado: 05001-31-05-008-2020-00038-01  
Radicado Interno: P1622222  
Asunto: Confirma sentencia



**SECRETARÍA SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

<b>Proceso</b>	Ordinario
<b>Demandante</b>	Gloria Damaris Ruiz Cano
<b>Demandado</b>	Jorge Andrés Lafoure Osorio y Protección S.A.
<b>Radicado</b>	05001-31-05-008-2020-00038-01
<b>Decisión</b>	Confirma sentencia
<b>Magistrado ponente</b>	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 18 de agosto de 2022 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 18 de agosto de 2022 a las 5:00pm

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**SECRETARIO**